



NUE 206-A-2019 (LS)

[REDACTED] contra Ministerio de Hacienda (MH)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de noviembre del dos mil veinte.

Descripción del caso:

El presente procedimiento fue iniciado por [REDACTED] contra tres resoluciones emitidas por el Oficial de Información del **Ministerio de Hacienda - en adelante MH-**. En ese sentido, las resoluciones objeto de impugnación son las siguientes:

A. Resolución de referencia UAIP/RES.0247.4/2019, emitida el día veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en donde se denegó la información relativa a:

- 1) Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas: carlos.cardoza@mh.gob.sv, juan.ayala@mh.gob.sv, mauro.jovel@mh.gob.sv, durante el período que comprende de octubre de 2017 a marzo 2018, generados en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI), específicamente en las siguientes fechas: 20, 23, 24 y 25 de octubre de 2017; 1, 5, 12, 14, 15, 18 y 19 de diciembre de 2017, 8, 9, 26, 29 y 30 de enero de 2018; 1, 2, 8, 15, 19, 20, 21 y 22 de febrero de 2018; y 2 y 5 de marzo de 2018
- 2) El documento que autoriza y comprueba la autenticidad de las cuentas de los correos electrónicos en mención.
- 3) A quienes fueron asignadas las cuentas antes mencionadas, así como los cargos de los involucrados.

Al respecto, el oficial de información del MH resolvió conceder acceso al solicitante de la copia certificada del memorándum DGEA/DACI/507/2019; asimismo, sobre lo



requerido en el requerimiento 1 resolvió que se trata de información confidencial conforme a los Arts. 6 literal f) y 24 literales a) y c); y sobre el requerimiento 2, se declaró improponible por adolecer de un vicio insubsanable, según las razones expuestas en el considerando VI de dicha resolución.

B. Resolución de referencia UAIP/RES.0261.2/2019, emitida el día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, en donde se denegó la información relativa a:

- 1) Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas: carlos.cardoza@mh.gob.sv, juan.ayala@mh.gob.sv, mauro.jovel@mh.gob.sv, durante el período que comprende de julio y agosto de 2019, generados en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI), específicamente en las siguientes fechas: martes 23 de julio de 2019, viernes 9 y lunes 12 de agosto de 2019.
- 2) El documento que autoriza y comprueba la autenticidad de las cuentas de los correos electrónicos en mención.
- 3) A quienes fueron asignadas las cuentas antes mencionadas, así como los cargos de los involucrados.

Al respecto, el oficial de información del MH resolvió conceder acceso al solicitante de la copia certificada del memorándum DGEA/DACI/511/2019; asimismo, sobre lo requerido en el requerimiento 1 resolvió que se trata de información confidencial conforme a los Arts. 6 literal f) y 24 literales a) y c); y sobre el requerimiento 2, se declaró improponible por adolecer de un vicio insubsanable, según las razones expuestas en el considerando VI de dicha resolución.

C. Resolución de referencia UAIP/RES.0264.2/2019, emitida el día cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en donde se denegó la información relativa a:

- 1) Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas:

juan.ayala@mh.gob.sv,

mauro.jovel@mh.gob.sv, generados en fecha 6 de diciembre de 2017 en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI).

- 2) El documento que autoriza y comprueba la autenticidad de las cuentas de los correos electrónicos en mención.
- 3) A quienes fueron asignadas las cuentas antes mencionadas, así como los cargos de los involucrados.

Al respecto, el oficial de información del MH resolvió conceder acceso al solicitante de la copia certificada del memorándum DGEA/DACI/525/2019; seguidamente, sobre el requerimiento 1 resolvió que se trata de información confidencial conforme a los Arts. 6 literal f) y 24 literales a) y c); asimismo, que la persona mencionada en los correos electrónicos como destinatario o emisor de los mismos, ha manifestado que no autoriza a compartir lo requerido debido a que no es posible comprobar el contenido de estos; y sobre el requerimiento 2, se declaró improponible por adolecer de un vicio insubsanable, según las razones expuestas en el considerando IV de dicha resolución.

II. Este instituto admitió el recurso de apelación y designó la Comisionada **Olga Noemy Chacón de Hernández** para instruir el presente procedimiento. No obstante, con el cese de funciones de la referida comisión en febrero del corriente caso, el presente procedimiento fue reasignado al Comisionado **Luis Javier Suarez Magaña** para que instruya el presente procedimiento. En plena observancia y respeto al Derecho de Defensa y Audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el Art. 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se corrió traslado al **MH** para que rindiera su informe justificativo.

En dicho informe, el ente obligado manifestó –en lo medular- que, según lo expresado por el recurrente, se asemeja a una inconformidad laboral por parte del apelante y no a un ejercicio de fiscalización a la gestión gubernamental y de manejo de los recursos públicos. También, expresó que en relación a la prueba ofertada por la parte apelante no corresponden a las resoluciones sometidas a apelación, por lo que tampoco tienen fundamento legal en ese proceso. Por lo tanto, expresó que la solicitud presentada por el ciudadano, así como su escrito de apelación, no poseen asidero legal para el ejercicio del derecho de acceso a la



información y riñen con la finalidad para la cual fue creada la LAIP; en consecuencia, solicita a este Instituto que se sobresea a ese ente obligado en el presente proceso de apelación.

III. Se celebró la audiencia oral del presente caso con la presencia de ambas partes.

En la fase probatoria, la parte apelante ofreció como prueba documental: i) copia de denuncia ante pddh de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; ii) Solicitudes MH-2018-0036, MH-2018-0044 y sus anexos de información relacionada a compra de speakers; iii) Solicitud de información UAIP / RES 0061/2018; iv) Solicitud de información MH 2019-004; v) Solicitud de información MH 2019-0016; vi) Solicitud de información de información MH 19-0246; vii) Solicitud de información MH 2019-0247 con sus anexos; viii) Solicitud de información MH 2019-0261 con sus anexos; ix) Solicitud de información mh 2019-0264 con anexos; x) cuarenta y dos correos electrónicos intercambiados en relación a la información relacionada a la solicitud MH 2019-0247; xi) Correos electrónicos intercambiados en relación a la solicitud de información MH 2019-0246; xii) Correos electrónicos relacionados a la solicitud de información MH 2019-0261; xiii) Correos electrónicos relacionados a la solicitud MH 2019-0264; xiv) Cadena de correos consistente en catorce folios con la cuenta de correo que fue solicitada para el presente caso; xv) Cadena de correos consistente en doce folios con la cuenta de una de las cuentas de correo que fue solicitada en el presente caso; xvi) Resolución con referencia UAIP-res.0260.2-2019; y xvii) Cadena de correos electrónicos en fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete al veinte de febrero de dos mil dieciocho relacionada a libre gestión, donde se explicó la utilidad y la pertinencia de la misma.

Luego de correr traslado al ente obligado, el pleno de comisionados deliberó sobre la misma y con base los artículos trescientos diecisiete al trescientos veinte, solamente se admitió la prueba referente a: Solicitud de información de información MH 19-0246; Solicitud de información MH 2019-0247 con sus anexos; Solicitud de información MH 2019-0261 con sus anexos; Solicitud de información mh 2019-0264 con anexos; Cuarenta y dos correos electrónicos intercambiados en relación a la información relacionada a la solicitud MH 2019-0247; Correos electrónicos intercambiados en relación a la solicitud de información MH 2019-0246; Correos electrónicos relacionados a la solicitud de información MH 2019-0261; Correos electrónicos relacionados a la solicitud MH 2019-0264; Cadena de

correos consistente en catorce folios con la cuenta de correo que fue solicitada para el presente caso; Cadena de correos consistente en doce folios con la cuenta de una de las cuentas de correo que fue solicitada en el presente caso; y Cadena de correos electrónicos en fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete al veinte de febrero de dos mil dieciocho relacionada a libre gestión, por ser útiles y pertinentes al presente caso.

En la fase de alegatos, la parte apelante manifestó -en lo medular-, que se valoren los documentos de prueba aportados, y se valoren los argumentos brindados por el ente obligado, junto con el contenido de los correos, ya que se pueden encontrar posibles faltas cometidas por los servidores públicos en cuestión.

En la fase de alegatos, la parte apelante manifestó -en lo medular- que en cuanto a la las peticiones que se le fueron improponibles, que en el proceso de autenticación se necesitaba un proceso de peritaje y se necesitaba crear documentación. No obstante, se le indicó al peticionario específicamente los identificadores de las cuentas de los correos electrónicos, nombres, apellidos, y los correos que están asociados a esos empleados.

De igual forma, indicó que los correos contienen afirmaciones sobre conductas no apropiadas atribuidas por el apelante a empleados de la institución, conductas que no han sido probadas en un debido proceso. En ese sentido, se han hecho valoraciones que son atentatorias contra los empleados del Ministerio de Hacienda; por lo que el ente obligado indicó que el contenido de los correos de los servidores públicos de los cuales se solicitó son información confidencial, ya que pueden afectar su honor de dichos servidores por las aseveraciones realizadas.

4. Análisis del caso:

Dicho lo anterior, el objeto de controversia del presente procedimiento se delimita en:

En cuanto al requerimiento A) *“1) Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas: carlos.cardozu@mh.gob.sv, juan.ayala@mh.gob.sv, muuro.jovel@mh.gob.sv, durante el período que comprende de octubre de 2017 a marzo 2018, generados en el Departamento de Adquisiciones y*



Contrataciones Institucional (DACI), específicamente en las siguientes fechas: 20, 23, 24 y 25 de octubre de 2017; 1, 5, 12, 14, 15, 18 y 19 de diciembre de 2017, 8, 9, 26, 29 y 30 de enero de 2018; 1, 2, 8, 15, 19, 20, 21 y 22 de febrero de 2018; y 2 y 5 de marzo de 2018. 2) El documento que autoriza y comprueba la autenticidad de las cuentas de los correos electrónicos en mención’’;

En cuanto al requerimiento B) ‘‘1) Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas: carlos.cardoza@mh.gob.sv, juan.ayala@mh.gob.sv, mauro.jovel@mh.gob.sv, durante el período que comprende de julio y agosto de 2019, generados en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI), específicamente en las siguientes fechas: martes 23 de julio de 2019, viernes 9 y lunes 12 de agosto de 2019. 2) El documento que autoriza y comprueba la autenticidad de las cuentas de los correos electrónicos en mención.’’;

Y en cuanto al requerimiento C) ‘‘1) Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas: carlos.cardoza@mh.gob.sv, juan.ayala@mh.gob.sv, mauro.jovel@mh.gob.sv, generados en fecha 6 de diciembre de 2017 en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI). 2) El documento que autoriza y comprueba la autenticidad de las cuentas de los correos electrónicos en mención.’’

En este sentido, para resolver la controversia se analizará el caso de la siguiente manera: (I) Breve referencia al derecho de acceso a la información pública (DAIP); (II) Breves referencias con relación a la información confidencial; (III) Consideraciones sobre el interés público frente al derecho a la intimidad; y (IV) Valoración de la prueba y aplicación al caso en concreto.

I. Para comenzar, este Instituto considera prudente mencionar que el derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional “implícito”, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.), pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. El DAIP comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o

informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan “interés público”. Este “derecho a saber” se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

El DAIP no es absoluto, puesto que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio, no obstante, los límites del derecho de acceso a la información no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar previamente establecidos por el legislador, de esta manera se previene que la Administración Pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información. Uno de los límites es la información confidencial, regulada en el Art. 24 de la LAIP.

II. En segundo lugar, cabe mencionar que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en su artículo 4 contempla el principio de máxima publicidad, es decir, que toda la información en poder de las entidades obligadas es pública, salvo que cuente con algunas de las excepciones contempladas en la misma Ley.

Ahora bien, uno de los alegatos dados por el ente obligado en la realización de la audiencia oral, es que el contenido de los correos solicitados es información confidencial. Al respecto, la LAIP define como información confidencial de acuerdo al Art. 6 letra “f”, como aquella *información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido*”

De lo anterior, es importante resaltar que dicha disposición contiene ciertos elementos para considerar que la información es confidencial; el primero que sea privada, pero además que pueda ser protegible en razón de interés personal.

No obstante, este tipo de información tampoco es absoluta y cede ante intereses constitucionalmente relevantes, **siempre que el impedimento de acceso esté justificado**. En todo caso, debe interpretarse de modo restrictivo. Lo anterior, fue ratificado en la



sentencia definitiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 31 de octubre de 2018, en el proceso de referencia 394-2015. (*resaltado proveído*)

III. Ahora bien, retomando otro de los argumentos brindados por el ente obligado, es que la información del contenido de los correos puede afectar la intimidad y el honor de los servidores públicos. En este sentido, es preciso y necesario constatar, la relevancia o interés público de la información, de manera que la limitación que implica el derecho a la intimidad personal frente al derecho a la información debe ceder cuando aparece la variable del “**interés público**”, ya sea por el interés objetivo de la información o por la relevancia y dimensión pública del sujeto que la protagoniza.

De ahí que resulta de gran importancia determinar qué datos hacen al “interés público” y cuáles se corresponden con el “morbo público” o “interés *del* público”, es decir, aquellos que satisfacen únicamente la curiosidad de los individuos.

El **interés público**, por contraposición a la mera curiosidad ajena, es el único elemento que justifica la exigencia de que se acepten intromisiones ocasionadas por la libertad de información en el derecho a la intimidad y en la vida privada de las personas¹.

Hace al “interés público” la importancia social de lo que se quiere comunicar y lo que se recibe, en aras de formar un verdadero discurso plural del que participen todas las voces. Es la trascendencia del hecho que se comunica. La relevancia pública de una información contribuye, junto con la veracidad, a situar en una posición estratégica frente a los derechos de la personalidad.

En este ejercicio, el “interés público” que tengan los datos constituye el concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad. Así, el derecho a la intimidad debe ceder cuando la información que se pretende transmitir se vincula directamente con cuestiones que resultan de **interés o relevancia para la sociedad o vida comunitaria**. En este supuesto, la libertad de información alcanza el máximo nivel de justificación en la intromisión a la

¹ cfr. BASTERRA, Marcela I., Derecho a la información vs. Derecho a la intimidad, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2012, pág. 111

intimidad de las personas, sean públicas o anónimas, resignándose los derechos subjetivos de la personalidad².

De esa forma debe entenderse que si se da el caso en que un dato que se pretende conocer evidencia el carácter de **interés público y general**, no existe –en principio- ningún tipo de limitación a su publicación, aunque pueda afectar la vida privada de las personas.

Esto es así porque el derecho a la información tendrá preeminencia respecto del derecho a la intimidad cuando sea necesario para asegurar la libre información en una sociedad democrática; es decir, siempre que exista un interés público legítimo que justifique la publicidad de la información -confidencial-. Por consiguiente, la intromisión en la vida privada de las personas debe admitirse si la información que se desea transmitir tiene interés público para la sociedad; en caso contrario, la revelación de aspectos privados de las personas públicas sin justa causa lesiona claramente su derecho a la intimidad

IV. Dicho lo anterior y en aplicación al presente caso, con base a la prueba admitida en audiencia oral consistente en: a) Solicitud de información de información MH 19-0246; b) Solicitud de información MH 2019-0247 con sus anexos; c) Solicitud de información MH 2019-0261 con sus anexos; d) Solicitud de información MH 2019-0264 con anexos; e) Cuarenta y dos correos electrónicos intercambiados en relación a la información relacionada a la solicitud MH 2019-0247; f) Correos electrónicos intercambiados en relación a la solicitud de información MH 2019-0246; g) Correos electrónicos relacionados a la solicitud de información MH 2019-0261; h) Correos electrónicos relacionados a la solicitud MH 2019-0264; i) Cadena de correos consistente en catorce folios con la cuenta de correo que fue solicitada para el presente caso; j) Cadena de correos consistente en doce folios con la cuenta de una de las cuentas de correo que fue solicitada en el presente caso; y k) Cadena de correos electrónicos en fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete al veinte de febrero de dos mil dieciocho relacionada a libre gestión, se han corroborado las gestiones realizadas por el Oficial de Información del **MH**, mismas que aparecen en el expediente administrativo relacionado al caso, así como la existencia de los correos electrónicos solicitados por la parte apelante. Asimismo, en cuanto a la resolución MH 19-0246 se ha podido determinar que el

² cfr. *Ibidem*, pág. 426



ente obligado ya ha concedido el acceso a cuentas de correos electrónicos en una anterior ocasión a la parte apelante, la cual es parecida al presente procedimiento.

Dicho lo anterior, este Instituto verificará la información solicitada por el apelante y las valoraciones respectivas:

a) Documentos que autoricen y comprueben la autenticidad de las cuentas de los correos electrónicos solicitados por el petionario.

Con relación a esta Información, en la resoluciones con referencia MH 2019-0247, MH 2019 0264 y MH 2019-0261, el oficial de información del MH resolvió que debido a que para corroborar la autenticidad de las cuentas de correo electrónico necesitan un peritaje, lo que necesitan ser producidos por una autoridad competente implicando producir nueva información.

Para basarse en este argumento, el ente obligado se refirió a la resolución emitida por este Instituto con referencia 58-A-2016 de fecha 23 de mayo de 2016, en la cual mencionan que *“los procedimientos de acceso a la información pública sustanciados por las unidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a información generada, administrada o en poder de los entes obligados, no así para generar información, por lo que manifestaron que al no haber interpuesto ante el ente obligado una solicitud de información pública dentro de los términos establecidos en la LAIP, adolecen de un vicio insubsanable y corresponde a decretar su improponibilidad...”*

Al respecto, cabe mencionar que el Art. 2 de la LAIP, establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla. En ese orden de ideas, y retomando lo establecido en el Art. 6 letra “c” de la LAIP, la información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo

de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico.

Con base a lo anterior y al analizar la naturaleza de esta información, este Instituto determina que no existe una obligación de generar dicha información por parte del **MH**, ya que esta constituye un acto material, es decir, que son actos que tienen la intención de crear, modificar, transferir o extinguir una actuación de la administración pública, pero las mismas no trascienden en el ámbito jurídico, ni tampoco existe una norma de derecho cuya aplicación se condiciona en los mismos.

No obstante lo anterior, si bien ya se mencionó que que no hay una obligación por parte del ente obligado en generar dicha información, no hay que perder de vista el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a la información que poseen las instituciones públicas, así como el principio de máxima publicidad. En este orden de ideas, tampoco puede dejarse de lado el hecho que la información solicitada no exista, ya que se pudo haber realizado un acto administrativo donde se hayan asignado dichas cuentas institucionales a las personas mencionadas anteriormente.

En este sentido y con base a los criterios establecidos por la RTA -Red de Transparencia Activa- “se deberá comprobar y motivar que la información solicitada existe o no, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y v) la precisión, en su caso de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que



deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en los caso que sea posible”.

Dicho lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública del ciudadano y la de garantizar los actos emitidos por la administración pública; en relación a la información consistente a: *Documentos que autoricen y comprueben la autenticidad de las cuentas de los correos electrónicos solicitados por el peticionario*, este Instituto considera procedente ordenar al **MH** que realice una nueva búsqueda de la información, consultando con las unidades correspondientes que pudieran tener la misma y documentando dichas actuaciones. De no encontrarse esta información, se deberá de declarar que la misma es inexistente y se le deberá informar al ciudadano lo resuelto.

b) Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas: carlos.cardoza@mh.gob.sv, juan.ayala@mh.gob.sv, mauro.jovel@mh.gob.sv.

Ahora bien, en relación a esta información, tal como se ha mencionado en otras resoluciones emitidas por este Instituto³, retomando lo establecido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México, ha dispuesto —en el 7 estudio y consideraciones sobre la publicidad del correo electrónico de los servidores públicos— lo siguiente: *“los correos electrónicos de los servidores públicos, al estar en un medio electrónico o informático, son documentos gubernamentales, susceptibles de acceso en los términos de la Ley; la condición sine qua non para considerarlos como tales es que en ellos se encuentren el registro del ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos”*.

³ Resolución NUE 2-A-2014 emitida a las quince horas con cincuenta y cinco minutos 14 de febrero de 2014.

Del mismo modo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ha determinado que: “El Libre Acceso a la información incluye el acceso, por parte de cualquier persona, a la documentación integrada por los expedientes públicos, minutas de reuniones, correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o a cualquier documentación financiada por presupuestos públicos”(“El estado de la libertad de expresión en Centroamérica, México y república dominicana” Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José Costa Rica, 2005)

De tal forma que, tratándose de comunicaciones realizadas a través de los canales oficiales, establecidos como herramientas para el desarrollo de sus funciones y no para su uso personal, éstas no deberían —en puridad— contener más elementos que los estrictamente relacionados con el ejercicio de la función pública, es decir que no se trata de cuentas privadas, a las que debe brindarse toda la protección en aras de salvaguardar la intimidad de sus titulares, sino todo lo contrario, aunque las cuentas de correo electrónico hayan sido asignadas a determinados servidores públicos, estas no les pertenecen, y son susceptibles de ser auditadas por la ciudadanía en el ejercicio de un derecho fundamental.

En todo caso, debe considerarse que, la labor de los servidores públicos, implica la publicidad de los actos que se ejecuten, de tal forma que se minimicen las áreas exentas de control democrático dentro del ejercicio de la función pública, y aunque la condición personal de servidor público, no implica, automáticamente, una suspensión de los derechos que la Constitución garantiza a toda persona, al realizarse la ponderación de intereses entre el derecho al acceso a la información y su derecho a la intimidad, este Instituto busca su armonización o saludable equilibrio mediante una interpretación constitucional que garantice el balance entre tales derechos —*balancing test*—, reconociendo que esta labor debe efectuarse con criterio restrictivo y en cada caso concreto.

De tal forma que, conforme a lo dispuesto por este Instituto en la resolución definitiva del caso referencia 25–A–2013: “el derecho a la información tendrá preeminencia respecto del derecho a la intimidad cuando sea necesario para asegurar la libre información en una sociedad democrática; es decir, siempre que exista un interés público legítimo que justifique la publicidad de la información. Por consiguiente, la intromisión en la vida privada de las personas debe admitirse si la información que se desea transmitir tiene interés público para



la sociedad; en caso contrario, la revelación de aspectos privados de las personas públicas sin justa causa lesiona claramente su derecho a la intimidad”.

Así las cosas, los correos electrónicos utilizados en este caso por el **MH** pueden ser solicitados por los ciudadanos cuando se les sea requerido; esto debido al poder de contraloría que ejercen los ciudadanos en conocer cómo utilizan este tipo de herramientas de comunicaciones y el uso que se les da. Esto es así debido a que la población ejerce contraloría a las actuaciones de la administración pública, por lo que deben conocer cómo se utilizan y administran los bienes del estado, ya que esto genera más transparencia entre el Estado y los ciudadanos, que a la larga se crea una sociedad más democrática. Por lo tanto, no es aceptable que esta información se catalogue como información confidencial, ya que predomina el interés general, que fue mencionado anteriormente, en conocer las comunicaciones que se dan dentro de la administración pública -en este caso el **MH**- ya que son comunicaciones que se realizan en el marco de sus funciones.

En consecuencia, como este tipo de herramientas de comunicaciones se utilizan en el marco de las funciones laborales que realiza la administración pública, donde se hace uso de una plataforma tecnológica establecida y mantenida a través de fondos de los contribuyentes, su contenido debe ser público y por lo tanto, es objeto del derecho al acceso a la información, siempre que no se compruebe que concurra causa legal para declarar su reserva o clasificarlos como confidenciales.

En concordancia a lo anterior, si los correos electrónicos que se requieren exponen algún dato acerca de la intimidad o la vida privada de su emisor, su receptor o un tercero, o no se relacionan con el ejercicio de funciones públicas, debe aplicarse lo dispuesto en el Art. 30 de la LAIP, siendo obligación de la entidad que los posea, realizar versiones públicas de los mismos, a fin de divulgar únicamente la información estrictamente pública.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 6 y 18 de la Cn., 52 inciso 3º, 58 letras b., d. y g.; 94, 96 letra d., y 102 de

la LAIP; 82 bis letra “b” de la LACAP; y, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto, **resuelve:**

a) **Modificar** las resoluciones emitidas por el Oficial de Información del MH UAIP/RES.0247.4/2019, emitida el día veintitrés de agosto de dos mil diecinueve; UAIP/RES.0261.2/2019, emitida el día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve; UAIP/RES.0264.2/2019, emitida el día cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en cuanto a la información que no fue entregada.

b) **Ordenar** al titular del MH que, en el plazo de **diez días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, entregue a la apelante, en versión pública, la siguiente información: a) *Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas: carlos.cardoza@mh.gob.sv, juan.ayala@mh.gob.sv, mauro.jovel@mh.gob.sv, durante el período que comprende de octubre de 2017 a marzo 2018, generados en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI), específicamente en las siguientes fechas: 20, 23, 24 y 25 de octubre de 2017; 1, 5, 12, 14, 15, 18 y 19 de diciembre de 2017, 8, 9, 26, 29 y 30 de enero de 2018; 1, 2, 8, 15, 19, 20, 21 y 22 de febrero de 2018; y 2 y 5 de marzo de 2018;* b) *Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas: carlos.cardoza@mh.gob.sv, juan.ayala@mh.gob.sv, mauro.jovel@mh.gob.sv, durante el período que comprende de julio y agosto de 2019, generados en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI), específicamente en las siguientes fechas: martes 23 de julio de 2019, viernes 9 y lunes 12 de agosto de 2019; y c) Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de ese Ministerio, del contenido de los correos electrónicos enviados y/o recibidos entre las siguientes cuentas: carlos.cardoza@mh.gob.sv, juan.ayala@mh.gob.sv, mauro.jovel@mh.gob.sv, generados en fecha 6 de diciembre de 2017 en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI). debiendo de llevar la razón de certificación respectiva. Y en cuanto a la información relacionada a los documentos que autoricen y comprueben la autenticidad de las cuentas de los correos electrónicos solicitados*



por el peticionario, en el mismo plazo establecido anteriormente, deberá realizar una nueva búsqueda de la información con las unidades correspondientes que podrían tener la información relacionada, documentando cada procedimiento seguido. En caso de no encontrarse la información en controversia, se deberá declarar su inexistencia, relacionando todos los medios probatorios y los hechos que surjan en dicha diligencia, debiendo informar al ciudadano de dichas diligencias realizadas y los resultados de la misma.

c) **Ordenar al MH** que, por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**

d) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.


Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JJ/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



